

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

NUM. 34.

Sesion del 5 de Agosto de 1863.

PRESIDENCIA DEL S^r URIBURU.

Continuacion de la discusion sobre los proyectos de Justicia Federal.

Presidente.

Albarellos
Alsina
Aguirre
Augier
Agote
Bedoya
Blanco
Cabral
Cantilo
Civit
Castro
Elizalde
Garcia (D. J. A.)
Gorostiaga [D. B.]
Gorostiaga [D. L.]
Granel
Gutierrez z
Ibarra
Igarzabal
Mármol
Montes de Oca
Moreno
Moscoso
Obligado [D. P.]
Obligado [D. A. C.]
Ortiz
Ocampo
Oroño
Padilla
Pizarro
Quintana [D. M.]
Quintana [D. J.]
Ruiz Moreno
Sarmiento
Torrent
Velez
Villanueva.
Zavaleta
Zuviria
Zavallia

CON AVISO.

Garcia (D. P.)
Lezama
Martinez
Rojo

SIN AVISO.

Del Rio.

En Buenos Aires á 5 de Agosto de 1863, reunidos en su sala de sesiones con asistencia del Sr. Ministro de Justicia, los Sres. Diputados al márjen, el Sr. Presidente proclamó abierta la sesion. Leida, aprobada y firmada el acta de la anterior, se leyó una nota del P. E. acompañando un proyecto de contrato para el establecimiento de una línea telegráfica de la ciudad de Buenos Aires al Rosario. Se destinó á la Comision de Hacienda.

Se presentó un proyecto para el establecimiento de correos en el interior de la República por los Sres. Zavaleta, Padilla, Alsina y Cabral.

Sr. Zavaleta—Diré dos palabras para fundar este proyecto.

Sr. Presidente, es averiguado que el servicio de Correos se hace hoy bastante mal, y se puede decir, que vá empeorando dia á dia. Entiendo que este mal servicio debe atribuirse á la falta de una ley que establezca los correos, y que reglamente su servicio. El proyecto que se presenta estriba sobre la base de ese servicio, aunque siempre por empresa particular, empero de una manera diferente á la

actual, porque establece tambien muy diversas condiciones. Este proyecto tiene ademas la ventaja que dejando establecida ya la línea, el P. E. no puede de ninguna manera disminuir el número de Correos que se establecen, por dar preferencia á unos sobre otros. Hoy tenemos todo el Norte de la República con tres Correos mensuales que se comunican con la Capital. Ademas, el servicio actual tiene otros inconvenientes que vienen á trabar la marcha de otras empresas, con gran perjuicio del público.

Por estas pocas razones comprenderá la Cámara que el proyecto merece su consideracion.

Sr. Presidente—Hallándose suscrito el proyecto por cuatro Diputados pasará á la Comision de Hacienda.

(En seguida se leyó un proyecto presentado por el Sr. Alsina).

Sr. Alsina—Siento decir, Sr. Presidente, que á pesar de haber leido con detencion los antecedentes pasados por el P. E. relativos á la negociacion con el Gobierno Oriental, hoy como antes, cuando llamé al Sr. Ministro á este lugar, opino que en este caso no se han satisfecho las exigencias del honor Nacional. Por estas razones he formulado el proyecto que se acaba de leer.

Me es imposible, Sr. Presidente, entrar al fondo de la cuestion porque para ello tendria que traer á consideracion todos los antecedentes, que son por cierto bastante largos, y me limitaré á estas breves palabras, pidiendo el apoyo de mis cólegas, para que pase á comision.

Concluiré diciendo que debo llamar la atencion de la Comision sobre la nota de remision del Gobierno, porque en ella, apesar de haber pasado inapercibido el concepto, se niega á la Cámara el derecho con que le pidió los antecedentes. (*Aprobado*).

Sr. Presidente—Pasará con los antecedentes remitidos por el P. E. relativos á la cuestion oriental, á la Comision de Negocios Constitucionales.

Sr. Mármol—He oido decir que el proyecto pasa á la Comision de Negocios Constitucionales.

Sr. Presidente—Sí señor.

Sr. Mármol—Yo entendia que debia ir á la Comision de Lejislacion.

Sr. Presidente—Haré leer el artículo que á ello se refiere.

Sr. Mármol—Si está seguro el Sr. Presidente yo no insisto: tenia duda solamente.

Sr. Torrent—Creo igualmente que debiera pasar á la Comision de Lejislacion.

Sr. Presidente—Se leerá el Reglamento. (Se leyó).

Sr. Torrent—No tiene nada de Constitucional esto.

Sr. Quintana (D. M.)—Pero es que tiene de político.

Sr. Elizalde—No hay duda.

(En seguida se leyó un proyecto presentado por el Sr. Zuviria).

Sr. Zuviria—Cuando el proyecto que acaba de leerse pide su apoyo á hombres de corazon que sienten los dolores de la Patria; á hombres ilustrados con la esperiencia de todos los tiempos, me parece que pocas palabras me bastarán para fundarlo. Solo trataré, pues, de llenar brevemente el deber que me impone el Reglamento.

Como se vé la idea fundamental es la de sancionar una ley de amnistia para tantos Argentinos que se ven privados de respirar el aire de su patria, sin haberse hecho reos de delitos ó crímenes que pidan un castigo, pues para estos queda de todo punto franca la accion de los tribunales, ante quienes acudirán los particulares que hubiesen sufrido perjuicios, ó hubiesen sido damnificados. El se refiere únicamente á aquellos Argentinos que por diverjencias en ideas políticas ó motivos análogos, vagan y sufren fuera del seno de sus familias, que son aun mas desgraciadas que ellos.

El proyecto no contiene idea nueva alguna. Desde la mas remota antigüedad todos los pueblos cultos y Gobiernos civilizados, cuando han concluido sus guerras civiles, ó para concluir las han dado en oportunidad leyes análogas para traer y ligar á los hombres por medio de uno de los vínculos mas fuertes, cual es el de la gratitud. He dicho, *todos los pueblos y Gobiernos civilizados*, porque la única ley de los pueblos salvajes es la de la crueldad, de la proscripcion, de la venganza, en una palabra. Y aun cuando el corazon no lata con sentimientos jenerosos por los sufrimientos de la humanidad, siempre una ley como la presente, será una medida de alta política, de grande utilidad; y todo Gobierno hábil y previsor no debe dejar escapar el momento de darla, puesto que todo acto de jenerosidad que garanta el porvenir, con el sosiego del presente, debe adoptarse sin trepidacion. Comprendo, señor, que el proyecto que presento, es la ley salvadora en las circunstancias en que nos encontramos. Echemos una mirada por las Provincias del interior, y veremos que ellas, con lijerísimas escepciones, presentan un cuadro el mas lamentable. Sus fronteras han sido desguarnecidas y saqueadas por los bárbaros; sus hombres han abandonado sus casas, intereses y familias; en una palabra, es una ruina completa la que pesa sobre toda la República. Y ya que tenemos tantas desgracias que lamentar, disminuyámoslas haciendo que los hombres que andan errantes y desterrados vuelvan á su hogar. Creo, señor, que la ley cuyo proyecto presento, será una venda que cure, al menos en parte, las heridas de la patria.

(Habiendo sido suficientemente apoyado se mandó el proyecto á la Comision de Negocios Constitucionales.)

Sr. Montes de Oca—Ya no hay asunto que no vaya á esa Comision.

Sr. Presidente—Es á la que corresponde por su carácter político. Continúa la discusion en particular de los artículos del proyecto N° 1 sobre Tribunales Nacionales.

Sr. Moreno—He pedido la palabra para pedir una esplicacion sobre el art. 14.

Deseo saber si la Comision entiende que queda por este artículo eliminado todo artículo sobre competencia entre autoridades nacionales y provinciales, que pudiera suscitarse; es decir, comprendo muy bien la voz retirado.

Si entablado un juicio en un tribunal provincial, llegara á suscitarse despues en el curso del

asunto alguna articulacion sobre competencia de las autoridades provinciales y nacionales, no debiera ser otro ese artículo en los casos de los tres incisos siguientes, ó si debiera tramitarse ó sustanciarse.

No está claro el artículo, porque si no queda desechada toda articulacion sobre competencia entre la jurisdiccion provincial y la nacional, inútil es el artículo que dice que quedarán finalizados y sentenciados en la jurisdiccion provincial etc. etc. y si quedan eliminados debe ponerse mas claro para evitar cuestiones que pueden sobrevenir despues. Desearia oir á la Comision.

Sr. Quintana (D. M.)—Por mi parte señor Presidente no estoy muy conforme con esa teoria sobre la jurisdiccion, y si ahí se hubiera dirigido la observacion del señor Diputado no hubiera podido satisfacerle á nombre de la Comision, por el contrario le hubiera apoyado; pero el señor Diputado se limita á preguntar si en virtud del artículo 14 los juicios una vez radicados ante la jurisdiccion provincial, aunque por la Constitucion correspondan á la nacional, si pueden tener ó no lugar los artículos de competencia. ¿No es esto?

Sr. Moreno—Radicados.

Sr. Quintana (D. M.)—Radicados he dicho. El artículo 14 es demasiado explícito y el mismo señor Diputado lo ha dado á conocer por sus palabras. El dice si los artículos de competencia fuesen todavia admisibles apesar de la radicacion del juicio ante las autoridades provinciales entonces el artículo 14 seria inútil. Así, pues dada la existencia del artículo, la consecuencia lógica y rigorosa es que los artículos de competencia no pueden tener lugar una vez que la jurisdiccion ha sido radicada.

Sr. Moreno—Estoy conforme con las esplicaciones dadas por el miembro informante, sin embargo como indiqué antes desearia que se pusiera mas claro. Me temo que se vayan á suscita articulaciones que embaracen el curso de los tribunales de provincia y puesto que el señor Diputado miembro informante de la Comision asegura: que una vez radicado un asunto ante un tribunal de provincia quedan eliminados los artículos sobre competencia, desearia que se pusiese mas claro.

Sr. Quintana [D. M.]—Hablaré personalmente porque no he consultado con los demas miembros de la Comision. Yo jamás tendré inconveniente en aclarar el testo de una ley, por-

que creo que debe ser el mas claro posible á fin de que esté al alcance de todos y cada uno el poder salvar las dificultades que se puedan encontrar. Pero respecto al artículo en discusion es demasiado claro, porque dice: “una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia será sentenciado y fenecido en la jurisdiccion provincial; y solo podrá apelarse á la Corte Suprema etc. etc. Desde que va á ser sentenciado y fenecido, es claro que el artículo de competencia no puede tener lugar, porque tampoco puede tener objeto. De todos modos desde que el artículo dice que tiene que ser sentenciado y fenecido un asunto en la jurisdiccion provincial, de ninguna manera pues se salió de esa jurisdiccion para ir á la nacional. Por esta razon yo no creo de necesidad aclarar mas el testo del artículo.

Sr. Zavaleta—Pido la palabra para indicar al señor Diputado que se fije en el inciso 4º del artículo 12 que es muy claro y que es al que hace referencia el artículo 14 (leyó.)

Sr. Moreno—No insisto señor.

Sr. Gorostiaga (D. B.)—Quería pedir á la Comision una esplicacion sobre la supresion hecha en el proyecto sancionado por el Senado del inciso 2º del artículo 2º del proyecto presentado por el Gobierno que dice así (leyó.) El Senado ha suprimido este inciso del artículo 2º y lo ha agregado al inciso del artículo 1º. La Comision propone á la Cámara la aceptacion del proyecto tal cual ha venido del Senado. Pediria pues á la Comision tuviera la bondad de explicarme las razones que ha tenido para aceptar este cambio.

Sr. Quintana (D. M.)—Las razones que la Comision de Lejislacion de esta Cámara ha tenido para aceptar la variacion hecha por el Senado, del inciso 2º del artículo 2º y agregarlo al inciso 1º del artículo 1º es tan poderosa, señor Presidente, que hace innecesaria la indicacion de otras.

Tratando los artículos 100 y 101 de la Constitucion de los asuntos que corresponden á los tribunales federales, establece por regla jeneral que corresponde á la Corte Suprema y tribunales inferiores de la Nacion, el conocimiento y decision de todas las causas que versan sobre puntos rejidos por la Constitucion etc. etc. Tal es la disposicion del artículo 100. Viene en seguida el artículo 101 y dice: En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdiccion por apelacion segun las reglas que prescriba el Congre-

so etc. etc. Las dos palabras con que termina el artículo 101 son á juicio de la Comision bastante claras, y esplicitas. Segun estas ningun juzgado de seccion, ningun otro tribunal nacional que no sea la Suprema Corte de Justicia, puede conocer de los asuntos en que una provincia sea parte. En ellos la Corte Suprema tiene jurisdiccion ordinaria y esclusiva. Este mandato de la Constitucion tan terminante y espreso quedaria ó no eludido aceptando el proyecto tal como lo propuso el Gobierno? á juicio de la Comision ha sido evidente que sí. Por el inciso 2º del artículo 2º cuya supresion ha notado el señor Diputado, por Santiago se decia: [leyó.]

Atento el tenor del artículo 101 de la Constitucion este inciso atacaba las prerogativas de la Corte Suprema de Justicia, distraia esos asuntos de su jurisdiccion ordinaria y esclusiva para hacerlos fallar en primera instancia por los otros tribunales y que fuesen solo en grado de apelacion al Tribunal Superior. De ahí la razon de la supresion; y como era, por otra parte, necesario determinar la jurisdiccion á quien estos asuntos correspondian, fué indispensable agregarlos al inciso 1º del artículo 1º que trata de los asuntos en que debe conocer en 1.ª instancia la Corte Suprema.

Sr. Gorostiaga (D. B.).—Me permito observar ante todo que segun este mismo proyecto de ley que discutimos, puede haber asuntos en que siendo parte una Provincia, sin embargo, solo vengán en apelacion ante la Corte Suprema de Justicia. Esto lo dice el inciso 2º del artículo 14. [Leyó.]

Hé ahí, segun el proyecto que discutimos un caso en que sin embargo de ser parte una provincia, el pleito no viene orijinariamente á la Corte Suprema, y esta conoce en grado de apelacion, puesto que el artículo 14 dice que solo puede apelarse en ese caso á la Corte Suprema de la última sentencia pronunciada por los tribunales de provincia. Entonces segun este mismo proyecto no en todos los asuntos en que una provincia sea parte, la Corte Suprema de Justicia ha de conocer orijinariamente.

Hay efectivamente esa disposicion en la Constitucion que ha recordado el Sr. Diputado que deja la palabra, pero esta misma disposicion existe en la de los Estados Unidos. Mas en la nuestra existe otra disposicion que tambien existia en la de Norte América y dice: que en todas las causas que se versen sobre puntos rejidos

por la Constitucion, por las leyes de la Nacion y por los tratados con los naciones extranjeras, la Corte Suprema solo tendrá jurisdiccion apelable. ¿Como se concilian dos disposiciones contrarias? Siempre que una Provincia sea parte, dice una, ó en todos los casos en que sea parte, la Corte Suprema no puede ejercer jurisdiccion sino orijinariamente, y la otra disposicion dice: en todos los asuntos rejidos por la Constitucion, por las leyes del Congreso y por los tratados, la jurisdiccion será apelable. Pero es que pueden conciliarse estas dos disposiciones. La jurisdiccion ordinaria está dada aquí por razon de las personas, se dá orijinariamente, y por razon de la materia cuando el asunto sea rejido por alguna disposicion de la constitucion, las leyes del Congreso ó los tratados, entónces la corte conoceria en grado de apelacion. Desuerte que el conflicto vendria en un pleito rejido por la Constitucion y en el que una provincia fuese parte.

Fundado en esta doctrina es que creo que el inciso 2º de este artículo, estaba bien como estaba antes.

Quintana [D. S.].—Confio, Sr. Presidente, que pocas palabras bastaran para contertár á las observaciones del Sr. Diputado que la deja. No puedo negar al Sr Diputado que la jurisprudencia de los Estados Unidos haya establecido casos en que una provincia sea parte y sin embargo la Corte Suprema de Justicia no ejerce jurisdiccion orijinaria y esclusiva, pero si puedo decirle que la Constitucion de los Estados Unidos no contiene en la disposicion á que se refiere el artículo 101 de la nuestra las mismas palabras que aquella emplea al hablar de la jurisdiccion orijinaria. El artículo de nuestra Constitucion ha dicho orijinaria y exclusivamente. . . .

Sr. Gorostiaga (D. B.).—Y exclusiva dice tambien.

Sr. Quintana (D. M.).—Yo creo que no. Ser ello lo que fuese no debemos tratar esta clas asuntos bajo la faz de la jurisprudencia de Estados Unidos sino cuando esa jurisprudencia se ajuste á nuestra Constitucion, ó cuando ofrece duda. Pero en el caso actual no hay contradiccion de ningun jénero entre los artículos 100 y 101, asi como no existe tampoco entre la regla jeneral y la escepcion que la limita. Por la regla jeneral la jurisdiccion de los tribunales nacionales ó los asuntos que son de su jurisdiccion deben tramitarse en 1ª instancia ante los jueces de sec-

cion y en grado de apelacion, ante la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que dice el artículo 100, y el 101 con las siguientes palabras: En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdiccion por apelacion segun las reglas y escepciones que prescriba el Congreso. Pero la regla jeneral que establecen los artículos no puede servir para echar por tierra las escepciones, que en seguida se establecen con la misma claridad, es decir, sin perjuicio de las resoluciones jenerales.

Con la mera lectura de estos dos artículos, ó del último solo, queda pues establecido que la regla jeneral es efectivamente la que el Sr. Diputado acaba de referir; que los asuntos de la jurisdiccion nacional sean ventilados en 1ª instancia, ante los jueces de seccion y los otros ante la Corte Suprema de Justicia; que todos esos asuntos que versen sobre jurisdiccion nacional, es decir, que versaren sobre una materia en que está interesado un embajador ó Ministro Publico, esos los tramitará la Corte Suprema orijinaria y esclusivamente, con exclusion de los juzgados de Seccion y de cualquiera otra autoridad nacional ó provincial. Es verdad, Sr. Presidente, que existen dos casos para la jurisdiccion; que esta puede ser por razon de las personas y de las materias. He dicho ya que por regla jeneral, por la última razon deben ser tramitados ante los jueces de seccion, y en segundo ante la Corte Suprema de Justicia, pero por razones de las personas, ha establecido tambien jurisdiccion el artículo 101 de la Constitucion y este mismo ha sido puesto en mayor escala que la relativa al otro. Por eso es que dice: Todos los asuntos en que una provincia sea parte, sea que versen sobre leyes del Congreso ó sobre la materia &a. &a.

Es, por decirlo asi, una verdadera causa de corte que no debe ser tratada sino por el P. J. supremo.

Esto por lo que hace á la Constitucion, que por lo que respecta al proyecto en discusion la observacion del Sr. Diputado en caso de ser cierta no tenderia á restituir el inciso 2º del artículo 2º. Probaria cuando mas, que el inciso 2º del artículo 14 no es lógico con la regla jeneral sentada en virtud del mandato de la Constitucion y él nos debiera decir quitemos el inciso 2º del artículo 14. Pero es que no existe esa contradiccion entre la disposicion del inciso 2º del artículo 2º y la del inciso 2º del artículo 14. Este no se refiere á negocios en que la provincia sea parte, y

por el contrario se refiere á negocios en que no lo sean, que unicamente se ventilen entre ciudadanos de la misma provincia ó extranjeros. Esta intelijencia ó interpretacion del inciso 2º del artículo 14 está completada por el inciso 4º del artículo á que antes se refirió un Sr. Diputado por Tucuman [leyó]. Queda pues establecido, en virtud de las terminantes palabras de este inciso que no hay contradiccion alguna, ni se puede equivocar el verdadero sentido del inciso 2º del artículo 14, como acaba de asegurarlo el Sr. Diputado por Santiago; es decir este inciso mal puede referirse á pleitos en que las provincias sean parte desde que la jurisdiccion no se ha admitido en semejante caso.

Sr. Gorostiaga (D. B.)—No he debido, Sr. Presidente, pedir la supresion de lo dispuesto en el art. 14, porque creo que la disposicion de este y de los tres incisos que siguen es conforme á la Constitucion y conforme tambien á mis principios.

He dicho anteriormente que hay contradiccion entre la doctrina que se invoca, fundándose en las palabras de la Constitucion para suprimir el inciso 2.º del art. 2.º y sostener la disposicion del art. 14. La disposicion de este, dice que en cualquiera pleito que se promoviese ante los Tribunales de Provincia y cuyo juicio se radicara, sobre todo en pleitos en que se tratase de la validez de una ley ó de un decreto, ó de una autoridad de Provincia, es que entónces solo habrá recurso á la Corte Suprema de Justicia, por apelacion; yo entiendo que esta disposicion está bien y lo único que pretendo es que con la misma doctrina con que se sostiene esta disposicion se sostenga la otra que dijese: En los asuntos en que siendo una Provincia parte, pero que versándose sobre puntos rejidos por la Constitucion &a. &a. los jueces de seccion fallasen, habrá apelacion para ante la Corte Suprema de Justicia, que era lo que decia el inciso 2.º del art. 2.º del proyecto del Gobierno.

Se ha llamado mucho la atencion sobre las palabras de la Constitucion. El art. 101 de ella dice: En los casos en que una Provincia sea parte, la Corte Suprema conocerá orijinaria y esclusivamente; pero llamo tambien la atencion de la Cámara sobre la disposicion de la Constitucion, tan absoluta como esta, que dice: *En todas las causas que se versen sobre puntos rejidos por la Constitucion.* Esta es una jurisdiccion que se dá por razon de la materia y una de las dispo-

siciones principales, uno de los fundamentos para la creacion del P. J. es precisamente para los puntos rejidos por la Constitucion, por las leyes del Congreso, lo que debe dar jurisdiccion á los Tribunales Federales, porque estos deben tener facultades tan estensas como las del P. E. Debe estenderse el P. J. á todos aquellos puntos á que se extiendan las leyes del Congreso. Es el caso, que entiendo yo se ha de realizar mas entre nosotros. Los conflictos entre los derechos de un ciudadano y los de una Provincia, son los que constantemente han de tener lugar. El otro dia ponia un ejemplo y se pueden poner muchísimos análogos. Mañana una Provincia dá una ley imponiendo derechos de esportacion. El ciudadano á quien se le cobran ¿qué recurso tiene? Si una Provincia es parte, el Fiscal lleva al particular ante los Tribunales de Provincia, le embarga los bienes y le hace pagar la contribucion ¿qué recurso le queda á éste ciudadano? No pudiendo venir en apelacion ante la C. S. de Justicia ¿es posible que no tenga recurso de ningun jénero, porque siendo parte una Provincia solo orijinariamente puede conocer la C. S. de Justicia? Si viniese quejándose ante la Corte Suprema y le dijese: he sido perjudicado por una ley anti-constitucional que se ha dictado en tal Provincia, por la que se me ha obligado á pagar tal cantidad. La C. S. de Justicia le cerraria la puerta? Esto seria. . . .

Sr. Elizalde—Lo oirá y la abrirá la puerta.

Sr. Gorostiaga (D. B.)—Vendria en apelacion.

Sr. Quintana (D. M.)—Vendria ante la Corte Suprema demandando á la autoridad de Provincia que habia dictado una ley inconstitucional.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—¿No vendria apelando del preceso que se habia seguido?

Sr. Quintana [D. M.]—No señor, vendria por una causa de Corte establecida en la Constitucion.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—La jurisprudencia de los Estados Unidos á este respecto es terminante. Allí se han presentado varias veces pleitos de esta naturaleza. Recuerdo uno principalmente sobre el cual ha habido una larga discusion. Fué el pleito seguido por un ciudadano con el Estado de Virginia. El caso era el siguiente: El Congreso de Estados Unidos dictó una ley concediendo una loteria en beneficio de un distrito. El ciudadano de Estados Unidos tomó

estos billetes y salió á venderlos á los otros Estados. En el de Virginia existia una ley prohibiendo severamente la venta de billetes de Loteria. Toman á este ciudadano, le siguen un proceso, le embargan los billetes y le cordanan en la pena á que por las leyes de ese Estado habia incurrido. Se sigue el pleito ante los Tribunales de Virginia en 1.ª y 2.ª Instancia. Entonces este ciudadano ocurre á la C. S. de Justicia y con este motivo se suscita la cuestion de competencia, de si la Corte podia, siendo un Estado parte, conocer por apelacion en ese proceso, por apelacion interpuesta ante los Tribunales del Estado. Me voy á permitir leer algunas de las consideraciones que hizo el jefe de la Justicia esponiendo precisamente este caso. Es una decision sumamente estensa porque toma 30 ó 50 pájinas, pero en ella se encuentra el punto en que disintimos y dice. (Leyó.)

Es sumamente largo este informe y no quiero fatigar á la Cámara con su lectura; pero es la verdadera doctrina que establece que puede haber casos en que, aun siendo parte una Provincia, pero versándose sobre un punto rejido por la Constitucion ó por leyes dictadas por el Congreso, aunque la Corte tuviera jurisdiccion orijinaria por razon de las personas, teniendo al mismo tiempo jurisdiccion apelada por la naturaleza de la causa, la Corte puede conocer en grado de apelacion, sea de la resolucion de una provincia, sea de la resolucion de los jueces de seccion. Consiguientemente, el inciso 2.º del art. 1.º tal como viene en el proyecto del Gobierno atribuye el conocimiento de las causas en que una provincia sea parte, y que por la naturaleza de la causa corresponde en grados de apelacion á la Corte Suprema, atribuye el conocimiento de ellas á los jueces de seccion en primera Instancia, aunque corresponde en grado de apelacion á la Corte Suprema.

Sr. Quintana—Yo tengo muy poco que agregar á lo que antes habia espuesto, porque apesar de las citas del Sr. Diputado por Santiago, las observaciones que hice fundadas en el testo espreso de la Constitucion, han quedado en pié.

Yo no tengo la erudiccion del Sr. Diputado por Santiago, ni mucho menos la erudiccion del Juez Marshall que acaba de citar el Sr. Diputado; pero tengo la erudiccion necesaria para saber lo que significan en nuestro idioma todas las palabras, así como sé lo que significan las palabras *orijinaria* y *exclusivamente*. A este respec-

to, señor, nadie puede enseñarme mas que lo que dice el diccionario. Pero, señor, por mas atrevida que parezca esta proposicion, voy á demostrar con dos palabras, que la decision del juez que ha citado el Sr. Diputado, está fundada en un error muy vulgar; la Constitucion de los Estados Unidos, de la cual hemos tomado la Constitucion Nacional que nos rige no ha establecido dos reglas jenerales respecto de la jurisdiccion de la Corte Suprema y de los Tribunales de Seccion, es decir, dos reglas paralelas que por mas que se prolonguen nunca pueden encontrarse. La Constitucion ha establecido una regla jeneral que atribuye á la Corte Suprema el conocimiento de todos los negocios de la jurisdiccion nacional por apelacion de los Juzgados de Seccion. Esta es la regla jeneral. Ahora vienen las escepciones que limitan esa regla jeneral; y en esas escepciones, apesar de que por regla jeneral la jurisdiccion de la Corte Suprema es en todos los asuntos en que se versen leyes de la Nacion ó tratados, en que la Corte conoce en grados de apelacion, apesar de todo esto, si se trata de un asunto en que una Provincia es parte, en ese caso, pertenece orijinaria y esclusivamente á la Corte Suprema. Aquí está el error del Sr. Diputado. Desde que la Constitucion de los Estados Unidos ha establecido por regla jeneral que la jurisdiccion de la Corte Suprema en estos asuntos ejerza siempre por apelacion á escepcion de todos los casos en que una Provincia sea parte, yo le pregunto al Sr. Diputado por Santiago si la doctrina del Juez Marshall no viene á estar en abierta contradiccion con la regla jeneral.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Entre todos los asuntos y entre todas las causas ¿qué diferencia hay?

Sr. Quintana—Entre todos los asuntos en que la Nacion sea parte, no encuentro diferencia.

Sr. Gorostiaga (D. B.)—En todos los asuntos en que una Provincia sea parte, dice, la Corte Suprema tiene jurisdiccion orijinaria exclusivamente. Mientras tanto, el Sr. Diputado dice que no se puede conciliar esa disposicion.

Sr. Quintana—Se puede conciliar como se concilia toda regla jeneral con una escepcion. Voy á demostrar como en el lenguaje de la Constitucion la palabra asunto y la palabra causa son sinónimas. El artículo 100 dice: (Leyó.) Viene despues el artículo 101, y dice: (Leyó.)

Yo creo que no se puede dar una cosa mas clara, mas terminante, apesar de todas las inter-

pretaciones que le hayan podido dar los comentadores de la Constitucion de los E. U. Repito una vez mas que la Constitucion no ha establecido dos reglas jenerales de jurisdiccion, sino que ha establecido una regla jeneral de jurisdiccion por razon de la materia, y luego ha establecido una escepcion en favor de las personas, en todos los asuntos en que una provincia sea parte. Yo creo que esta es la única jurisprudencia ajustada á los términos estrictos de la Constitucion, cuya claridad debe hacernos mucha mas fuerza que todas las interpretaciones que hayan podido darse. Respecto de la intelijencia de las palabras del idioma español, el diccionario es la única autoridad que yo conozco.

Ahora vengo á la contradiccion que encuentra el señor Diputado por Santiago entre la doctrina que sirve para sostener el inciso 2º del artículo 1º tal como lo ha propuesto la Comision de Lejislacion, y entre el inciso 2º del artículo 14.

Partiendo de puntos opuestos, el señor Diputado por Santiago supone que los asuntos á que se refiere el inciso 2º del artículo 14, son precisamente aquellos en que una provincia sea parte. Yo le digo al señor Diputado que está completamente equivocado. ¿Cuál es la palabra del inciso 2º del artículo 14 que le autorice para decir que se refiere á los asuntos en que una provincia sea parte? Se trata de asuntos particulares, que sean ventilados ante una autoridad ó ante un funcionario cualquiera de provincia. No solamente esto está establecido clara y terminantemente por las palabras del inciso, sino que viene despues el inciso 4º del artículo 12 que no debe olvidar el señor Diputado, porque precisamente es una escepcion de la regla jeneral.

Ese inciso ha establecido á mi modo de ver que la regla debe precisamente rejir en materia de prorogacion de jurisdiccion; y se ha establecido que el consentimiento de los particulares en cierta clase de asuntos, basta para desaforar á la Corte. Despues viene el inciso 2º y dice que esos pleitos se inicien y se acaben ante la jurisdiccion provincial. Despues viene otro inciso y dice: que aun en el caso en que se ha establecido la regla jeneral, es admitida la apelacion para ante la Corte Suprema, como dice el inciso 1º pero repito que esas no son las causas en que la provincia sea parte. Cuando la provincia sea parte, entonces orijinaria y exclusivamente irá ante la Corte Suprema. Y esto se comprende,

señor, porque no se puede absolutamente someter á los tribunales de provincia, los asuntos en que la misma provincia sea parte: sería lo mismo que decir que la provincia fuera juez y parte.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Entiendo, señor Presidente, que la cuestion que tenemos en este momento es de mucha importancia; que no es una cuestion de palabras que pueda resolverse por el diccionario, y por eso vuelvo á molestar la atencion de la Cámara. Entiendo que la disposicion del artículo 14, que dice que cuando un juicio estuviere radicado en los tribunales de provincia y hubiera recaído en él sentencia definitiva, habrá apelacion ante la Corte de Justicia, está muy claro. Lo mismo digo respecto de la disposicion del inciso 4.º del artículo 12 que determina los casos en que es posible la prorrogaion de la jurisdiccion.

Entiendo, señor, que lejos de ser todo esto contrario á la Constitucion, está perfectamente arreglado á ella; precisamente es una de las atribuciones que la Constitucion confiere al Congreso. Por consiguiente, el Congreso puede perfectamente decir cuales sean los asuntos de la competencia federal que decidirán los tribunales de provincia. En estos casos habrá jurisdiccion apelada porque está en las facultades prescriptas por la Constitucion, prefiar las escepciones de esa regla jeneral. Puede, por ejemplo, el Congreso determinar que los asuntos que no pasen de tal cantidad, aun cuando por su naturaleza sean de la competencia de los tribunales federales, puede el Congreso, digo determinar que queden bajo la jurisdiccion de la provincia. Esta es una disposicion que existe en la ley orgánica de los E. U. Allí ciertos asuntos, aun cuando por su naturaleza sean de la competencia de los tribunales federales, si estos asuntos no esceden de 500 dollars, no hay accion deducible ni ante los jueces de seccion ni ante la Corte Suprema. Son los tribunales de los Estados los que deciden en esas causas. Nosotros no hemos establecido limitacion de ningun jénero; y segun esta disposicion, tendrian que ser juzgados por los tribunales federales, los asuntos en que entienden los comisarios y los jueces de paz, es decir, los asuntos de 50 pesos. Está pues, perfectamente ajustada á la Constitucion la disposicion del inciso 4.º del artículo 12, lo mismo que la disposicion del inciso 2.º del artículo 14.

En apoyo de lo que he dicho, puedo decir tambien que esta es la misma intelijencia que se ha

dado á estas dos disposiciones, es decir: todos los asuntos rejidos por la Constitucion, por leyes del Congreso y por tratados públicos, dan jurisdiccion apelada á la Corte Suprema; y en todos los casos en que una provincia sea parte, la Corte Suprema conoce orijinaria y esclusivamente. Pero esta no es solamente la opinion del Juez Marshall, sino tambien la opinion de todos los comentaristas de la Constitucion de los E. U. Es tambien la opinion del señor Story, y pido á la Cámara que me permita leer sus palabras en apoyo de esta misma doctrina, porque está es puesta con mas claridad que por el Juez á que me he referido.

Refiriéndose el señor Story al caso que antes he mencionado (leyó). No quiero molestar mas la atencion de la Cámara, porque creo que con la lectura que he hecho y con lo que he manifestado, es lo bastante para poder votar con conocimiento de causa el artículo que se discute.

Sr. Velez—Ya he dicho otras veces, señor Presidente, que, aunque es verdad que la Constitucion norte-americana ha sido el modelo de la nuestra, no la hemos copiado exactamente. Asi es que todos los comentadores de la Constitucion arjentina, se han ocupado en señalar lijeramente las diferencias que hay entre una y otra Constitucion, y se ha de continuar así en esta tarea; porque, repito, no es una cópia exacta.

Ahora bien, désele el valor que se quiera á todas las citas que ha hecho el señor Diputado que ha dejado la palabra; yo digo que ante el testo espreso de la Constitucion arjentina, una provincia no puede, de ninguna manera, ser demandada ante los tribunales de seccion; todos los argumentos en pro de esta doctrina vienen á estrellarse contra el testo espreso de la Constitucion.

Por el artículo 100 de nuestra Constitucion, señor Presidente, se traza la esfera ó el ámbito que abraza el P. J.; es decir, se señala hasta donde se estiende la jurisdiccion federal. Luego, el artículo 101, marca las escepciones del artículo citado; y una de esas escepciones, es que una provincia no puede ser demandada ante un tribunal de seccion. Esto es claro, y para cualquiera que haya estudiado un poco el derecho, se presenta luminoso y evidente. Primeramente se designa la esfera hasta donde se estienden las atribuciones del P. J., y luego se designan las escepciones ó las limitaciones que tiene ese mismo poder. Esto ha hecho la Constitucion

arjentina, y por eso en el artículo 101 ha consignado la escepcion de que no puede demandarse á una provincia sino ante la Suprema Corte, es decir, que es un caso de corte.

Ha dicho tambien para oponerse á esta inteligencia, el señor Diputado por Santiago, que en tal caso, el particular que se viese perjudicado por una provincia, no tendria adonde reclamar. Este es un sofisma, señor Presidente, puesto que puede ocurrir y ocurrirá efectivamente ante la Suprema Corte. Por consiguiente los derechos de los particulares están garantidos. ¿O se cree que con esta escepcion se quiere cerrar la puerta á los reclamos de los particulares? Esto seria una ofensa al Superior Tribunal que es la garantia que tienen todos los arjentinos. Entonces, pues, ese argumento tambien queda desvanecido, puesto que como he dicho, estos reclamos van á ser oidos y lo serán siempre. No hay que ir á buscar la opinion del Juez Marshall ni la de Story cuando el testo de la Constitucion arjentina es claro y terminante.

Por estas razones yo he de estar por la modificacion propuesta.

Sr. Quintana—Con temor de cansar verdaderamente á la Cámara insistiendo sobre este punto, me limitaré á muy breves palabras, pidiendo que se me disculpe si efectivamente insisto demasiado.

Por incidente, señor, toqué el punto relativo á la prorogacion de la jurisdiccion provincial en virtud del conocimiento de las partes. Yo, señor, lo creo inconstitucional, no lo creo ajustado á los verdaderos principios que deben rejir en materia de jurisdiccion y que efectivamente rijen, por los cuales las atribuciones de los tribunales están bien delineadas.

El Sr. Diputado por Santiago, estudiando el art. 101 de la Constitucion, ha debido encontrar en él la autorizacion de esa doctrina de la prorogacion de la jurisdiccion provincial, por el consentimiento de las partes en los asuntos que son de la competencia de los tribunales nacionales; pero yo creo que él ha dado demasiado alcance á esas palabras. La Constitucion dá efectivamente al Congreso el derecho de establecer las reglas y las escepciones, segun las cuales, la Corte Suprema ejercerá jurisdiccion por apelacion; pero esas reglas y esas escepciones, son para determinar la tramitacion; para prefijar cuales son los asuntos que por su pequeña importancia, no

deben salir de la jurisdiccion de los jueces de seccion.

Yo creo que el Congreso estaria en su perfecto derecho para decir que los asuntos que no pasen de tal cantidad no vayan á la Corte Suprema de Justicia; pero no me parece que estaria en su perfecto derecho para decir que un asunto que por la Constitucion corresponde á la jurisdiccion federal, sea sometido á la jurisdiccion provincial. Esto es sobre el incidente, y dejaré la palabra porque temo cansar la atencion de la Cámara.

Sr. Presidente—Se vá á votar si el punto está suficientemente discutido.

(Se votó y resultó afirmativa jeneral).

Como segun el sistema adoptado, cada artículo que fuese objeto de una discusion especial, ha de serlo tambien de una votacion especial, se votará el inciso primero tal cual lo aconseja la Comision.

[Se votó y resultó aprcbado por afirmativa de 30 votos contra 8].

Sr. Zuviñá—No es una modificacion de importancia la que voy á proponer á la Comision, sino tendente á aclarar un punto. El artículo 22 dice: las causas que se hallen pendientes ante los tribunales de provincia, serán terminadas y falladas por los mismos tribunales. A mi juicio, esto importa la violacion de un principio. Supongamos que existen en los tribunales de provincia algunas causas de la competencia federal, que se hayan iniciado, pero que no estén pendientes. Como por este artículo puede haber lugar á alguna mala interpretacion, yo le pediria á la Comision que se ponga: *pendientes ó en tramitacion*. Todos sabemos que hay asuntos que se han tramitado durante dos ó cuatro años, de donde resulta que ya no existen los jueces que existian....

Sr. Elizalde—No he comprendido bien el alcance de las palabras del Sr. Diputado.

Sr. Zuviñá—Me esplicaré mejor. Pendientes, supone que están en tramitacion.

Sr. Elizalde—Lo que este artículo quiere decir, es que todos los asuntos que se hallen pendientes en los tribunales de provincia, continúen allí su tramitacion, es decir, donde se hallen.

Sr. Zuviñá—Entiendo bien; pero encuentro que este artículo puede dar lugar á alguna controversia, y mi objeto era aclarar mas el pensamiento de la Comision. Por esta razon creia que

con agregar la palabra *tramitacion*, se aclaraba el pensamiento; porque hay ciertos asuntos que aunque están pendientes, están paralizados.

Sr. Elizalde—Todos los asuntos que se hallen bajo la jurisdiccion de los tribunales de seccion, tienen que ser fallados allí.

Sr. Quintana—El Sr. Diputado, á mi juicio, imita la intelijencia que la Comision le dá á este artículo. La Comision, al decir todas las causas que se hallen pendientes, ha querido decir todas las causas iniciadas, esten ó nó tramitándose. Me parece, pues, que el Sr. Diputado ha creido que la intelijencia que tiene el artículo, es abrazar únicamente las causas cuya tramitacion se ajita; pero yo creo lo contrario: creo que todas las causas que esten iniciadas ante la jurisdiccion provincial, aun cuando correspondan á la jurisdiccion nacional, tienen que ser finalizadas allí.

Sr. Zuviria—Los jueces de seccion son inamovibles; supongamos que una causa que haya sido iniciada ante uno de estos jueces, se halle paralizada durante mucho tiempo. . . .

Sr. Elizalde—Conoce el tribunal de provincia.

Sr. Zuviria—Yo creo que el objeto del artículo, es que conozca el juez que ha iniciado el asunto.

Sr. Elizalde—El artículo habla de la jurisdiccion, no habla de los jueces.

Sr. Zuviria—Segun la intelijencia que se le dá al artículo, yo creo que quedaria mas claro agregando la palabra que yo propongo. Sin embargo no insistiré.

Sr. Alsina—Desearia preguntar á la Comision si no considera que despues de la última resolucion acerca del inciso 7°, no está demas este inciso 6°. Segun el inciso 7°, siempre que la Nacion sea parte, son competentes los tribunales nacionales; y segun este inciso 6°, es solo cuando se ejerza la accion fiscal, es decir, cuando la Nacion sea parte actora, se ocurre á los tribunales. Yo creo que este inciso 6° está demas.

Sr. Quintana—Yo creo que no está demas. Como el proyecto ha venido estableciendo los diversos asuntos que corresponden á la jurisdiccion nacional y de que deben conocer en 1ª instancia los jueces de seccion, despues de haber especificado diversos casos, viene este inciso y establece una regla jeneral. Por consiguiente, yo creo que este inciso no es inútil, puesto que tiene por objeto comprender alguna omision que haya

podido hacerse al determinar los diversos casos que se han especificado.

Sr. Alsina—Yo hacia la observacion por la naturaleza del caso, que es grave. Como se ha sentado por principio jeneral que la Nacion puede ser demandada, puede entenderse por este inciso que solo cuando la Nacion sea parte en virtud de un contrato, es que puede ser demandada ante los tribunales nacionales.

Sr. Quintana—El inciso 4° dice: (Leyó). Despues viene el inciso 5° [leyó] y en seguida viene el inciso 6° (leyó). Asi es que en lugar de restringir este inciso la intelijencia de los demas, viene por el contrario á completar la intelijencia de los incisos 4° y 5°. Por consecuencia, cuando se presente un caso que no esté comprendido en los incisos 4° y 5° corresponderá á la jurisdiccion nacional por el inciso 6°.

Sr. Gorostiaga (D. B.)—Voy á permitirme pedir á la Comision otra esplicacion sobre el alcance de la disposicion contenida en el artículo 17 que dice (leyó). ¿Cree la Comision que todos estos artículos de competencia, han de ser decididos precisamente por la Corte Suprema?

Sr. Zavaleta—Yo entiendo que esa es la intelijencia.

Sr. Gorostiaga—Es decir que la decision de todas estas causas corresponde directamente á la Corte Suprema?

Sr. Elizalde—Suponga el Sr. Diputado que se entabla una demanda ante un juez nacional, y este juez que debia conocer del asunto se ha negado á conocer de él.

Sr. Gorostiaga—Pero viene apelando del auto en que se ha negado por no ser competente, porque antes hay otro artículo que establece [leyó.] Yo entiendo, Sr. Presidente, que por las disposiciones contenidas en estos dos artículos, vamos á introducir una gran perturbacion en el ejercicio de la justicia federal. Dado nuestro modo de ser, nuestras provincias lejanas unas de otras, separadas por desiertos, dado un juez de seccion en cada una de ellas, estos artículos de competencia de apelacion para ante la Corte Suprema de Justicia que reside en la capital, son la denegacion de la justicia federal. Todos saben que aun en las causas mas justas, cuando el litigante es de mala fé, siempre trata de negarse á satisfacer lo que se le cobra. Por consiguiente, el litigante de mala fé negará siempre la competencia del juez para que se manden los autos desde Jujú á Buenos Aires; de manera que dar esa resolucion y

acabar con las demandas es la misma cosa.

Sr. Ministro del Culto—En el artículo 10 del otro proyecto sobre procedimientos, encontrará el Sr. Diputado la reglamentación de todo lo relativo á las apelaciones, declinaciones de jurisdicción y todo lo demas. Entonces será el momento de hacer las observaciones que ahora hace.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—No, señor, estoy haciendo observaciones muy competentes. Por el art. 6º se admite como una cosa previa las excepciones de competencia, y concluye con estas palabras: Segun este artículo, la incompetencia puede promoverse ante el juez de seccion. Yo digo que en todos los asuntos se ha de promover esta cuestion de competencia para que venga á decidirse ante la Corte Suprema de Justicia que reside en Buenos Aires, y yo digo que así no habria justicia federal en las provincias. Lo que convendria, seria que los mismos jueces de seccion tuvieran facultad de juzgar de su competencia é incompetencia juzgando á la vez del asunto, para que viniese un proceso á la Corte Suprema, y no para que se juzgara únicamente de la competencia ó incompetencia. De otra manera, la Corte Suprema diria: es competente, vuelva otra vez el expediente á Jujuí.

Creo, pues, que este es el momento de hacer la observacion, puesto que aquí es donde se admiten los artículos de competencia, estableciéndose que serán decididos por la Corte Suprema de Justicia.

Sr. Quintana—Yo creo que efectivamente es aquí donde debe hacerse la observación que ha hecho el Sr. Diputado por Santiago, puesto que aquí es donde se trata de los artículos de competencia que deben ser resueltos por la Corte de Justicia. Creo tambien que la admission de los recursos en este artículo, tienen el inconveniente de ocasionar una gran demora; pero no son de tanta importancia como los inconvenientes que traerá la admission de los artículos de competencia, puesto que de todas maneras, hasta los pleitos que se inicien por pequeñas cantidades, tienen que venir en apelacion á la Corte Suprema, y el gasto tiene que hacerse. Pero ¿qué quiere hacerle el Sr. Diputado? Desde que no se puede establecer una Corte Suprema en cada provincia, ni dejar á los jueces de seccion la facultad de resolver en primera y en última instancia sobre su propia competencia, tiene que ser así.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Yo quiero hacer lo que han hecho los norte-americanos.

Sr. Quintana—Fíjese el Sr. Diputado que los artículos de competencia pueden versar sobre la jurisdicción de los tribunales de provincia, y que un artículo de competencia puede ir hasta afectar la independencia ó la soberanía de cada provincia. No me parece, pues, prudente dejar la decision de estos artículos de competencia únicamente á los jueces de seccion, puesto que pueden traer un grave conflicto entre el juez de seccion y las autoridades de provincia que insistan en creerse competentes.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Siendo parte una provincia, no puede ser demandada ante un juez de seccion.

Sr. Quintana—El artículo habla de la competencia de jurisdicción en una causa en que un particular haya sido demandado por otro. Entonces el juez de seccion, puede declinar de la jurisdicción y decir que corresponde á la jurisdicción provincial.

Sr. Gorostiaga—No tiene derecho para hacerlo, porque la jurisdicción nacional y las leyes nacionales, son superiores por la Constitucion.

Sr. Quintana—Yo no le digo al Sr. Diputado que las autoridades tengan derecho de decir si el asunto es ó no de la jurisdicción provincial: una cosa es defender la jurisdicción en los casos que tengan derecho á ejercerla, y otra cosa es resistir á las decisiones del poder nacional. Otra cosa es tambien negar á las provincias la accion que tengan para reclamar que tal asunto es de la jurisdicción provincial.

Sr. Gorostiaga—Lo que caracteriza el régimen federal es precisamente la facultad que tiene la justicia nacional para resolver á qué jurisdicción corresponden los negocios.

Sr. Quintana—El régimen que hemos adoptado, no vá hasta cerrar la boca á los tribunales provinciales para que no puedan decir: esto me corresponde. El derecho de representar, y el derecho de decidir de la competencia son cosas muy distintas. En un artículo de competencia promovido por un particular, puede ir envuelta la jurisdicción de la provincia, toda la soberanía interna de una provincia. Y yo le pregunto al Sr. Diputado si es prudente dejar esto únicamente á la decision de los jueces de seccion.

Sr. Gorostiaga—No me ha comprendido el Sr. Diputado. Por el proyecto que discutimos, los jueces de seccion son competentes para decidir

en estas causas, y se dá apelacion para ante la Corte; pero no es á ese respecto que yo he suscitado la duda.

Sr. Quintana—Yo quiero fijar bien el sentido de la observacion que hace el Sr. Diputado....

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Yo decia que era conveniente que el juez, al decidir esta cuestion de competencia, fallará tambien sobre el fondo, y que viniera la apelacion sobre el todo, porque sino seria eternizar los pleitos.

Sr. Zuñivira—Voy á ver, Sr. Presidente, si tranquilizo algun tanto al Sr. Diputado que ha hecho la observacion sobre este artículo que á mí me parece demasiado claro, y que por no atender á su testo, se ha suscitado esta cuestion.

El artículo dice así (leyó). Aquí se supone que la cuestion se ha suscitado ya ante el juez federal y el juez provincial, y es solo en este caso que debe venir en apelacion á la Corte Suprema. No basta que se promueva un artículo de declinatoria de jurisdiccion, puesto que si la causa corresponde esclusivamente al tribunal federal, y se ha promovido el artículo malísimamente, en ese caso el juez no remitirá la causa. Por consiguiente no hay ese temor que dice el Sr. Diputado de que se eternicen los pleitos.

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Yo estoy hablando del art. 6° que dice [leyó].

Sr. García [D. J. A.]—En el proyecto tercero, que habla de las disposiciones comunes en todos los juicios, todo el título 6° se ocupa en las cuestiones de competencia y del modo de dirimir las. Cuando llegue la discusion de ese proyecto me parece que es la oportunidad de tratar mas detenidamente esto. El artículo 44, que habla de las cuestiones de competencia dice [leyó].

Sr. Gorostiaga [D. B.]—Eso es lo que estoy impugnando.

Sr. García [D. J. A.]—A pesar de que el artículo que estamos discutiendo establece que la Corte Suprema debe decidir de las cuestiones de competencia, podia postergarse la sancion de este artículo hasta que llegáramos al artículo 44 del tercer proyecto.

Sr. Presidente—Si á la Cámara le parece pasaremos á un cuarto intermedio.

(Se pasó á cuarto intermedio).

Sr. Elizalde—Creo, Sr. Presidente, que debe aprobarse tal como está, el artículo 6° y el 17 que se consideran en competencia, del proyecto en discusion.

El art. 6° se refiere á los casos en que los jueces

se declaren competentes en aquellas causas que no lo son, etc., etc. y se dice por el artículo que se apela á la Corte Suprema. El artículo 17 dice: [leyó].

Es decir, este es un principio jeneral como se ha establecido siempre. El mismo artículo 17 no solamente tiende á dar á la corte suprema las atribuciones de declinar la competencia que puede suscitarse por ejemplo, entre un juez de seccion y otro de provincia, sino ante los jueces de seccion de las diversas provincias, porque es preciso que haya alguna autoridad encargada de derimir estas cuestiones, é indudablemente no puede ser otra que la Corte Suprema de Justicia. Pero, á esto ha dicho el Sr. Diputado por Santiago que hay gran peligro en conceder á la Corte Suprema el derecho de reclamar ante ella de las decisiones de los jueces de seccion, mas yo creo todo lo contrario, que los peligros estarian en negar ese recurso. Si un juez de seccion por ejemplo, en un caso que no es de su competencia, se declarara competente y no pudiera reclamarse ante la Corte Suprema, ni ante nadie, por este recurso se espondria á formar un expediente que cuando viniese ante la Corte Suprema en apelacion, esta declarase aun la inconstitucionalidad de todo el proceso por haber sido formado y levantado por un juez que no tenia jurisdiccion para ello, y de aquí resultaria que los perjuicios que se querian evitar serian mayores, puesto que el solicitante habria invertido todo su tiempo y no habria seguido ningun proceso en forma, perdiendo completamente su tiempo y dinero. No veo porque se ha de establecer distinta jurisprudencia para uno y otro caso. Iniciado un asunto ante un juez de seccion si el juez se declara incompetente pasa el juez inmediato, pero si sucediera lo contrario entonces la parte que se considera perjudicada por ese auto apela á la corte suprema y la apelacion se concede en relacion ¿por qué establecer diversa jurisprudencia en el caso de la recusacion y en el caso de la competencia? Creo por lo tanto, que lejos de haber inconveniente hay una gran conveniencia en dar este recurso y establecer los principios jenerales.

Dado el punto por suficientemente discutido, se puso á votacion por partes el artículo 6° y fué aprobada la 1ª por afirmativa jeneral, la 2ª por mayoria, y la 3ª por 17 votos contra 13.

Sr. Obligado (D. P.)—Voy á hacer una lijérisima observacion al artículo 19, en que se es-

blece que los miembros de la corte suprema de justicia pueden imponer pequeñas multas á sus subalternos por la falta de cumplimiento en sus deberes, en el que no está destinado el objeto á que deben afectarse, y yo creo que pudiera fijarse.

Sr. Elizalde—Para el tesoro público.

Sr. Obligado [D. P.]—Podrá ser para resarcimiento de la parte dañada.

Sr. Elizalde—Es como todas las multas.

Sr. Obligado (D. P.)—No insisto.

En seguida se puso á votacion si se aprobaban todos los artículos del proyecto N° 1, que no lo hubieran sido especialmente, resultando afirmativa jeneral, quedando en consecuencia, sancionado como sigue:

El Senado y Cámara de Diputados &c.

Art. 1° La Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia:

1.° De las causas que versen entre dos ó mas provincias y de las civiles que versen entre una provincia y algun vecino ó vecinos de otra ó ciudadanos ó súbditos extranjeros.

2.° De aquellas que versen entre una provincia y un Estado extranjero.

3.° De las causas concernientes á Embajadores ú otros Ministros diplomáticos extranjeros, á las personas que compongan la Legacion, á los individuos de su familia, ó sirvientes domésticos del modo que una Corte de Justicia puede proceder con arreglo al derecho de jentes.

4.° De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de los Cónsules y Vice-Cónsules extranjeros en su carácter público.

Art. 2.° Los jueces nacionales de seccion conocerán en primera instancia de las causas siguientes:

1.° Las que sean especialmente rejidas por la constitucion nacional, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso, y los tratados públicos con naciones extranjeras.

2.° Las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un vecino de otra, ó en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero.

3.° Las que versen sobre negocios particulares de un cónsul ó vice-cónsul extranjero.

4.° Todo pleito que se inicie entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del Gobierno Nacional.

6.° Toda accion fiscal contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades de

bidas ó por cumplimiento de contratos, ó por defraudacion de rentas nacionales, ó por violacion de reglamentos administrativos.

6.° En jeneral todas aquellas causas en que la nacion ó un recaudador de sus rentas sea parte.

7.° Todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra.

8.° Las que se originen por choques y averias de buques, ó por asaltos hechos, ó por auxilios prestados en alta mar, ó en los puertos, rios y mares en que la República tiene jurisdiccion.

9.° Las que se originen entre los propietarios ó interesados de un buque, sea sobre su posesion ó sobre su propiedad.

10.° Las que versen sobre la construccion y reparos de un buque: sobre hipoteca de su casco: sobre fletamentos y estadias: sobre seguros marítimos: sobre salarios de oficiales y marineros: sobre salvamento civil y militar: sobre naufragios: sobre averia simple y gruesa; sobre contratos á la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargos de buques y penas por violacion de las leyes de impuestos y navegacion: sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles: sobre arribadas forzosas: sobre reconocimientos: sobre abandono, venta y liquidacion de créditos del buque: sobre cumplimiento de las obligaciones del capitan y tripulantes; y en jeneral sobre todo hecho ó contrato concerniente á la navegacion y comercio marítimo.

Art. 3.° Los jueces de seccion conocerán igualmente de todas las causas de contrabando; y todas las causas criminales cuyo conocimiento compete á la justicia nacional; á saber:

1.° Los crímenes cometidos en alta mar abordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros, serán juzgados por el juez de seccion del primer puerto argentino á que arribase el buque.

2.° Los crímenes cometidos en los rios, islas y puertos argentinos serán juzgados por el juez que se halle mas inmediato al lugar del hecho, ó por aquel en cuya seccion se encuentren los criminales, segun sea el que prevenga en la causa.

3.° Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en violacion de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la obsequiancia y seguridad de la Nacion, ó tiendan

á la defraudacion de sus rentas, ú obstruyan ó corrompan el buen servicio de sus empleados, ó violenten ó estorben la correspondencia de los correos, ó estorben ó falseen las elecciones nacionales, ó representen falsificacion de documentos nacionales ó de moneda nacional; ó de billetes de Banco autorizados por el Congreso, serán juzgados en la seccion judicial en que se cometieren.

4.º Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y esclusiva jurisdiccion, serán juzgados por los jueces de seccion allí existentes.

Art. 4.º La Corte Suprema conocerá por apelacion de las sentencias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo en todas las causas criminales iniciadas ante los jueces de seccion y en las civiles que quedan espresadas, siempre que el valor disputado esceda de la cantidad de doscientos pesos fuertes; y la sentencia de segunda instancia sea que confirme ó revoque, causará ejecutoria.

Art. 5.º Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la tripulacion de un buque mercante, ó entre alguno de ellos y su capitán ú otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se halle el buque con apelacion para ante el juez de seccion, que conocerá tambien en juicio verbal.

Art. 6.º Siempre que un juez de seccion se escuse de conocer en una causa de su competencia, ó retarde el administrar justicia, se podrá ocurrir á la Corte Suprema por el recurso de justicia denegada ó retardada. Y siempre que cozca de causa que no le competa, y rehusare inhibirse, podrá igualmente apelarse á la Corte, que resolverá el artículo segun su mérito.

Art. 7.º La jurisdiccion criminal atribuida por esta ley á la justicia Nacional, en nada altera la jurisdiccion militar en los casos en que, segun las leyes existentes, deba procederse por consejos de guerra.

Art. 8.º En las causas entre una provincia y vecinos de otra, ó entre una provincia y un súbdito extranjero, ó entre un ciudadano y un extranjero, ó entre vecinos de diversas provincias, para surtir el fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca originariamente, y no por cesion ó mandato, á ciudadanos, extranjeros ó vecinos de otras provincias respectivamente.

Art. 9.º Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus negocios en una provincia, serán reputadas para los efectos del fuero como ciudadanos vecinos de la provincia en que se hallen establecidas, cualquiera que sea la nacionalidad de sus socios actuales.

Art. 10. En las sociedades colectivas, y en general en todos los casos en que dos ó mas personas asignables pretendan ejercer una accion solidaria, ó sean demandadas por una obligacion solidaria, para que caigan bajo la jurisdiccion nacional, se atenderá á la nacionalidad ó vecindad de todos los miembros de la sociedad ó comunidad, de tal modo que será preciso que cada uno de ellos individualmente tenga el derecho de demandar, ó pueda ser demandado ante los tribunales nacionales, con arreglo á lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 2.º

Art. 11. La vecindad en una provincia se adquirirá para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, ó por tener en ella propiedades raices, ó un establecimiento de industria ó comercio, ó por hallarse establecido de modo que aparezca el animo de permanecer.

Art. 12. La jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en todas las causas especificadas en los artículos 1, 2 y 3 será privativa, excluyendo á los juzgados de provincia, con las escepciones siguientes:

1.º En todos los juicios universales de concurso de acreedores y particion de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad ó vecindad, de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la Nacion.

2.º En los lugares en que no haya establecidos jueces de seccion ó que se halle distante la residencia de estos, los Fiscales ó Coletores de rentas, ó individuos comisionados al efecto podrán demandar á los deudores del Fisco ante los jueces de provincia.

3.º Cuando se cometiere un crimen de los que por esta ley caen bajo la jurisdiccion Nacional, los jueces de provincia de cualquier categoria, podrán aprehender á los presuntos reos que pondrán á disposicion del juez nacional de seccion correspondiente, con la remision del sumario que hayan levantado para justificar la prision.

4.º Siempre que en pleito civil un extranjero demande á una provincia ó un ciudadano, ó bien el vecino de una provincia demande al ve-

cino de otra, ante un juez ó Tribunal de provincia ó cuando siendo demandados el extranjero ó el vecino de otra provincia, contesten á la demanda, sin oponer la escepcion de declinatoria, se entenderá que la jurisdiccion ha sido prorogada, la causa se sustanciará y decidirá por los Tribunales provinciales, y no podrá ser traída á la jurisdiccion nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14.

Art. 13. Las autoridades dependientes de Poder Ejecutivo Nacional, prestarán todo auxilio para la ejecucion de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que un juez nacional dirija un despacho precatório á un juez provincial, sea para hacer citaciones ó notificaciones, ó recibir testimonios, ó practicar otros actos judiciales, será cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil ú oficial ejecutor presente una orden escrita de un juez ó Tribunal nacional para ejecutar una prision ó embargo, las autoridades provinciales y personas particulares estarán obligadas á prestar el auxilio que él les requiera para el cumplimiento de su comision.

Art. 14. Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdiccion provincial; y solo podrá apelarse á la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales superiores de provincia en los casos siguientes:

1.º Cuando en el pleito se haya puesto en cuestion la validez de un tratado, de una ley del Congreso, ó de una autoridad ejercida en nombre de la Nacion; y la decision haya sido contra su validez.

2.º Cuando la validez de una ley, decreto ó autoridad de provincia se haya puesto en cuestion bajo la pretension de ser repugnante á la Constitucion Nacional, á los tratados ó leyes del Congreso, y la decision haya sido en favor de la validez de la ley ó autoridad de provincia.

3.º Cuando la intelijencia de alguna cláusula de la Constitucion, ó de un tratado ó ley del Congreso, ó una Comision ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decision sea contra la validez del título, derecho, privilejio ó exencion que se funde en dicha cláusula y sea materia del litijio.

Art. 15. Cuando se entable el recurso de apelacion que autoriza el artículo anterior deberá deducirse la queja con arreglo á lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relacion directa é inmedia-

ta á las cuestiones de la validez de los artículos de la Constitucion, leyes, tratados ó comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretacion ó aplicacion que los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil, penal, comercial y de minería no dará ocasion á este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11 artículo 67 de la Constitucion.

Art. 16 En los recursos de que tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Suprema revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; ó bien resolverá sobre el fondo, y aun podrá ordenar la ejecucion, especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razon.

Art. 17. La Corte Suprema decidirá las competencias que se susciten á instancia de parte, sobre jurisdiccion de los jueces nacionales.

Art. 18. La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitacion de los pleitos, con tal que no sean repugnantes á las prescripciones de la ley de procedimientos.

Art. 19. La Corte Suprema y los jueces de seccion tendrán la facultad de corregir con multas que no escedan de cincuenta pesos fuertes, ó prision que no esceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos ó las audiencias de las causas; y las que sus subalternos ú otras personas cometieren contra su dignidad obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de las partes; sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños causados.

Art. 20. Cuando un individuo se halle detenido ó preso por una autoridad nacional, ó á disposicion de una autoridad nacional, ó so color de una orden emitida por autoridad nacional; ó cuando una autoridad provincial haya puesto preso á un miembro del Congreso, ó á cualquier otro individuo que obre en comision del Gobierno Nacional, la Corte Suprema ó los jueces de seccion podrán á instancias del preso, ó de sus parientes ó amigos, investigar sobre el orijen de la prision, y en caso de que esta haya sido ordenada por autoridad ó persona que no esté facultada por la ley, mandarán poner al preso inmediatamente en libertad.

Art. 21. Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán apli-

cando la Constitucion como ley suprema de la Nacion, las leyes que haya sancionado ó sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes jenerales que han rejido anteriormente á la Nacion y los principios del derecho de jentes, segun lo exijan respectivamente los casos que se sujeten á su conocimiento, en el orden de prelación que va establecido.

Art. 22. Las causas que se hallen pendientes ante los tribunales de provincia á la promulgacion de esta ley, serán terminadas y fenecidas en los mismos tribunales, aunque por su materia ó por las personas interesadas en ellas pudieran pertenecer á la jurisdiccion nacional.

Art. 23. La presente ley será considerada como adicional y correctiva de la de 16 de Octubre de 1862.

Art. 24. Comuníquese, etc.

Sr. Elizalde—Pido la palabra para hacer una indicacion que no sé si la Cámara encontrará aceptable, y es que una vez sancionado un proyecto sea remitido á la Cámara de Senadores, sin esperar la sancion de los otros, porque entiendo que tiene poco que hacer, y puede ir adelantando el trabajo. [Apoyado.]

Sr. Presidente—Parece que la indicacion del

señor Diputado es de la aceptacion de la Cámara, de manera que se comunicará al Senado el proyecto que se ha votado.

Sr. Oroña—Voy á permitirme pedir al señor Presidente se sirva hacer invitar al señor Ministro de la Guerra para que dé algunas esplicaciones acerca del estado de la frontera. (Apoyado.)

Sr. Presidente—La Cámara resolverá por medio de una votacion si eso ha de tener lugar en lo sesion próxima.

Sr. Alsina—La proposicion debe ser contrainda á si se fija tal ó cual día.

Sr. Presidente—Precisamente decia eso.

Puesto á votacion si se fijaba el dia de la próxima sesion para el objeto que indicaba el señor Oroña, así se resolvió por mayoria.

Sr. Ocampo—Debemos continuar la discusion señor Presidente, porque el tiempo es muy corto y falta una porcion de asuntos. Las comisiones están recargadísimas.

Sr. Zavaleta—¿El señor Diputado quiere que quedemos en sesion permanente?

Sr. Ocampo—Aunque estemos toda la noche.

Sr. Presidente—No siendo apoyada la indicacion, se votará si se levanta la sesion ó no.

Así se resolvió por afirmativa, levantándose la sesion á las cinco y cuarto de la tarde.

